

Núm. 6

3ª SESIÓN ORDINARIA, EL 16 DE MAYO DE 1902

PRESIDENCIA DEL SEÑOR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO:—Asuntos entrados.—Se concede licencia al señor diputado Urbano de Iriondo.—Proyecto de ley, del señor diputado R. Varela Ortiz, prohibiendo los juegos de azar.—Proyecto de resolución del señor diputado Carlés, pidiendo al poder ejecutivo informes sobre lo gastado del fondo de conversión y respecto de si se han emitido títulos de los creados por diversas leyes, con objetos distintos á los determinados en ellas.

DIPUTADOS PRESENTES

Acuña, Albao, Alfonso, Amenedo, Argañaraz, Argerich, Astrada, Avellaneda, Balaguer, del Barco, Barraza, Barroetaveña, Benedit, Bertrés, Berrondo, Billordo, Bollini, Bores, Bustamante, Campos, Capdevila, Carbó, Carlés, Carreño, Castellanos, Centeno, Cernadas, Conte, Cordero, Coronado, Dantas, Demaría, Drago, Fonseca, Galiano, Gallino, Garzón, Gigena, Gómez, González Bonorino, Gouchon, Helguera, Iriondo (M.), Lacasa, Laferrere, Lagos, Leguizamón (G.), Leguizamón (L.), Loveyra, Lucero, Luna, Luque, Luro, Martínez (J.), Martínez (J. A.), Martínez (J. E.), Martínez Rufino, Mujica, Olivera, Orma, Ovejero, Padilla, Palacio, Parera, Peña, Pérez (B. E.), Pérez (E. S.), Pinedo, Posse, Quintana, Rivas, Robert, Roldán, Romero (G. I.), Romero (J.), Salas, Sarmiento, Sastre, Seguí, de la Serna, Sibilat Fernández, Silva, Tissera, Torino, Torres, Ugarriza, Uriburu, Urquiza, Varela, Varela Ortiz, Vedia, Victorica, Villanueva (B.), Villanueva (J.), Vivanco (R. S.)

CON LICENCIA

Iriondo (U.), Lacavera.

CON AVISO

Fonrouge, Guevara, Oroño.

SIN AVISO

Balestra, Barraquero, Casares, Castro, Comaleras, Dominguez, Echegaray, Ferrari, Naón, Olmos, Rosas, Vivanco (P.), Yofre, Zavalla.

—En Buenos Aires, á 16 de mayo de 1902, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados arriba anotados, el señor presidente declara abierta la sesión, á las 3 y 5 p. m.

ACTA

—Se lee y aprueba la de la sesión anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

—El honorable senado remite, en revisión, un proyecto de ley acordando permiso al ciudadano Servando Gómez para aceptar el viceconsulado de Portugal en San Nicolás de los Arroyos.—(A la comisión de negocios constitucionales).

PETICIONES PARTICULARES

—Nicolás Granada reclama un premio en tierras que correspondía á su señor padre coronel don Nicolás Granada.—(A la comisión de agricultura).

—Inés C. R. de Carvia reitera su pedido de pensión.—(A la comisión de peticiones).

LICENCIA

Sr. Secretario Ovando—El señor diputado Urbano de Iriondo comunica

que por razones de salud no le es posible incorporarse á la honorable cámara.

Sr. Presidente—La honorable cámara resolverá qué es lo que debe hacerse en este caso.

Sr. Lacasa—Concederle licencia con goce de dieta.

Sr. Presidente—Se encuentra exactamente en el mismo caso que el señor diputado Lacavera, con la agravación de hallarse enfermo.

Sr. Carlés—Que se siga el mismo procedimiento.

Sr. Presidente—Se votará si se acuerda la licencia solicitada.

—Se concede con goce de dieta.

ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES

—Comunican que se han constituido, las siguientes comisiones:

Presupuesto: presidente, señor Varela Ortiz; secretario, señor Centeno.

Obras públicas: presidente, señor Seguí; secretario, señor Torino.

Investigación judicial: presidente, señor Ugarriza; secretario, señor Torres.

Justicia: presidente, señor Martínez (J. E.); secretario, señor Naón.

Agricultura: presidente, señor Astrada; secretario, señor Pérez (E. S.)

Negocios constitucionales y culto: presidente, señor Quintana; secretario, señor Orma.

Marina: presidente, señor Garzón; secretario, señor Urquiza.

Hacienda: presidente, señor Luro; secretario, señor Olmos.

Instrucción pública: presidente, señor Avellaneda; secretario, señor Lucero.

Legislación: presidente, señor Pinedo; secretario, señor Padilla.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Desde la promulgación de la presente ley quedan prohibidos los juegos de azar en la capital de la República y territorios nacionales, como así mismo la introducción, circulación y venta de toda otra lotería que no se halle expresamente autorizada por el congreso.

Art. 2.º Pagarán una multa de mil pesos moneda nacional ó en su defecto sufrirán arresto por seis meses por cada infracción, y en caso de reincidencia una y otra conjuntamente:

- a) Las personas que tuvieran una casa de juegos de azar en que se admita al público, sea libremente, sea por presentación de los interesados, afiliados ó socios;
- b) Los administradores, banqueros y demás empleados de la casa, cualquiera que sea su categoría;
- c) Las personas que participaren del juego ó que la autoridad policial sorprendiera en el interior

de una casa de las comprendidas en el presente artículo;

- d) Los que hubieren establecido loterías no autorizadas por ley nacional ó tuvieran en su poder los billetes de loterías clandestinas emitidas dentro ó fuera del país;
- e) Los administradores, propietarios, agentes ó empleados de casas donde se vendan ó se encuentren billetes de loterías no autorizadas;
- f) Las personas que por medio de avisos, anuncios, carteles ó todo otro medio de publicidad hicieran conocer la existencia de esas loterías;
- g) Los que publicaren ó presentaren al público sus extractos;
- h) Los que introdujeran á la capital de la República ó territorios nacionales billetes de loterías no autorizadas ó de cualquier manera los circularan ó exhibieren.

Art. 3.º Los que establecieren ó tuvieran en las calles, caminos, plazas ó lugares públicos juegos de lotería ú otros de azar en que se ofrezcan al juego sumas de dinero, cualquiera que sea su cantidad ú objetos de cualquier naturaleza, pagarán una multa de 100 pesos moneda nacional ó, en su defecto, treinta días de arresto.

Art. 4.º Los infractores al artículo anterior no podrán acogerse á los beneficios de la libertad provisoria bajo caución establecida en el artículo 376 del código de procedimientos civil.

Art. 5.º En todos los casos serán secuestrados los fondos y efectos que se encontraren expuestos al juego: los muebles instrumentos, utensilios y aparatos empleados ó destinados al servicio de juegos de azar ó loterías no autorizadas.

Los billetes y extractos de loterías ya jugadas ó á jugarse serán destruidos el día mismo del secuestro con intervención de los empleados que designe la administración de la lotería nacional.

Art. 6.º Pagarán una multa de 2000 pesos moneda nacional ó, en su defecto, arresto por un año:

- a) Las personas que en cualquier sitio y bajo cualquier forma explotaren apuestas sobre carreras de caballos, juegos de pelota, billar, juegos de destreza en general ú otros permitidos por la autoridad, ya sea ofreciendo al público apostar ó apostando con el público directamente ó por intermediario;
- b) Los dueños, gerentes ó encargados de los locales donde se vendan ó se ofrezcan al público boletos de apuestas mútuas ó se facilite en cualquier forma la realización de tales apuestas;
- c) Los que se encarguen de la compra ó colocación de boletos de apuestas fuera del recinto de los hipódromos.

Art. 7.º Ningún campo de carreras podrá ser abierto al público sin la autorización del poder ejecutivo, que sólo permitirá las carreras de caballos que tengan por fin exclusivo la mejora de la raza caballar y sean organizadas por sociedades cuyos estatutos sociales hubieren sido previamente aprobados.

Art. 8.º Las sociedades que hubieren llenado las condiciones prescriptas por el artículo anterior, podrán, mediante el pago de la patente que fije la ley respectiva, organizar la apuesta mutua dentro del recinto de sus campos de carrera exclusivamente.

Art. 9.º El jefe de policía someterá al juzgamiento de los jueces correccionales á los infractores de la presente ley; y munidos de órdenes, subscriptas por él,

los funcionarios de policía podrán penetrar á las casas en que se verifiquen juegos de azar, se vendan ó se ofrezcan en venta billetes de loterías no autorizadas ó se celebren apuestas, ó vendan boletos de sport, toda vez que existiera la semiplena prueba de que en ellas se infringen las disposiciones de esta ley y al solo objeto de constituir en arresto á los contraventores y verificar el secuestro á que se refiere el artículo 4.^o

Art. 10 El importe de las multas que se impongan en virtud de la presente ley se destinará al sostenimiento de las sociedades de beneficencia de la capital de la República que el poder ejecutivo haya declarado comprendidas en los beneficios de la lotería nacional.

Art. 11. Comuníquese, etc.

R. Varela Ortiz

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

Existen, señor presidente, en las comisiones de la cámara una serie de iniciativas análogas á ésta, todas ellas tendentes á vigorizar la acción del estado, incitándolo á combatir, en forma eficaz y saludable, esta enfermedad social, perseguida en todas partes, también, por los medios más enérgicos.

El proyecto que he concebido se divide en tres partes, y quizá sea esa la única innovación que contiene con relación á los otros de esta índole que ya han sido presentados á la cámara; de donde resultaría que mi iniciativa no tendría ni siquiera el modesto mérito de la originalidad: viene, posiblemente, en hora tardía, sin otra pretensión que la de aportar un elemento más de observación práctica al logro de un anhelo público y que ya ha tenido sus más elocuentes intérpretes en el seno de esta misma cámara. Me refiero, como es natural, á mi distinguido colega por Buenos Aires el señor diputado Lacasa y á otros que en años anteriores han traído pensamientos análogos á sus debates.

Divido el proyecto que contiene esta iniciativa en tres partes:

Los «juegos de azar», cuya definición he tenido por más prudente no señalar en el cuerpo de la ley, ya porque una larga jurisprudencia nacional y extranjera la establece en términos precisos y exactos, ya porque he querido seguir el ejemplo de legislaciones extrañas que dejan la más amplia latitud de interpretación al poder judicial en materia como esta que, si es compleja, es típica y especial en sus variados caracteres subjetivos y objetivos.

Las «loterías», que contravienen las disposiciones de la ley 3313, reprodu-

ciendo en sus principales artículos lo que ya en otra oportunidad tuve el honor de presentar al estudio de la cámara en un proyecto que mereció el despacho favorable de la comisión de legislación y que ha tenido la poca fortuna de caer bajo la acción de una ley destructora, de caducidad, que corre por ahí, denominada *ley Olmedo*.

Y las «apuestas mútuas», que constituyen un peligro social verdadero, peligro social que ha despertado movimientos de opinión, que ha provocado protestas de la prensa, que ha producido solicitudes que han llegado hasta la casa del congreso y conflictos con la autoridad, que hasta ahora no se ha conseguido solucionar.

¿Cuáles son, señor presidente, las disposiciones que rigen en la capital de la República sobre juegos de azar? ¿Qué represión se impone á los profesionales en este delito? ¿Qué autoridad es la que ejerce jurisdicción para someterlos á juicio, declararlos culpables y aplicarles penas como tales?

Al sancionarse el código penal que rige en la República desde 1886, se omitió traer á las deliberaciones parlamentarias esta materia, materia que está codificada casi uniformemente en todas las naciones civilizadas; y lo que en aquel entonces quedó omitido, recién ahora, veinte años después de federalizado el territorio de la capital, se presenta como una exigencia de reparación perentoria, quizás, señor presidente, porque recién ahora resultan débiles todos los recursos empleados para combatir el mal y resultan estériles todos los esfuerzos consagrados á contener el desborde.

Esfuerzos y energías por una parte, recursos de legalidad sospechosa ó por lo menos discutida, concurren á revelar, sin embargo, que la autoridad policial no permaneció nunca impasible; y es esta una oportunidad que he de aprovechar para tributar un elogio al distinguido caballero que dirige la de la capital de la República, quien no ha trepidado en declarar en vigencia una serie de antiguas disposiciones, á fin de encontrarse armado para combatir lo que ya antes he llamado una calamidad social.

La primera disposición prohibitiva del juego que registran los anales patrios arranca, señor presidente, del año 1812 en sus comienzos, en el mes de marzo, y lleva las firmas de Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Saratea y Juan José Passo, es decir, fué dictada por el

primer Triunvirato. En ella se establecen ya, diré así, las prohibiciones que en adelante constituyen el verdadero cuerpo de legislación de que el jefe de policía actual se ha servido para perseguir el juego en la capital de la República.

«Por cuanto sin embargo, dice ese bando, de los repetidos bandos que se han publicado, prohibiendo los juegos en las pulperías, y cualesquiera otros parajes, y el uso de las armas prohibidas, se ha notado en estos últimos tiempos haberse generalizado la inobservancia de estas disposiciones tan razonables, como conducentes á la seguridad, buen orden y felicidad pública: Por tanto, y para que no se entienda que el trascurso del tiempo ha podido hacer insubsistente cuanto en orden á los referidos particulares se prescribió, en los indicados bandos, ordena y manda este superior gobierno: que los dueños de las casas de café, billar, bolos y bochas, no consientan en ellas otros juegos que los que les están permitidos, y que los pulperos, fonderos ó posaderos, no permitan en las suyas juego alguno, de ninguna clase, pena de veinticinco pesos de multa por la primera vez, doble por la segunda, y reagravada en la reincidencia, hasta el caso de hacerles cerrar sus dichas casas... Que todos los que se hallaran en corrillos jugando en las calles, ó en cualesquiera otros parajes, sea cual fuere el juego, serán presos y conducidos á la cárcel pública para aplicárseles el castigo correspondiente á su calidad... Y á fin de que lo prevenido en los antecedentes artículos, para cuyo celo y cumplimiento, como también para la persecución y aprehensión de los contraventores son autorizados todas las justicias, los alcaldes de barrio y sus tenientes, sea cual fuere el contraventor, aunque sea del fuero militar, el cual se deroga en estas causas, para la aprehensión, con calidad de entregarlos á sus jefes con los partes y sumarios», etc. etc.

Muy poco tiempo después y bajo el segundo Triunvirato, del que ya no formaban parte ni el señor Sarratea ni el señor Chiclana, se dicta el primer reglamento provisional de policía con las firmas de los señores don Juan José Paso, don Nicolás Rodríguez Peña y don Antonio Alvarez Fonte, reglamento provisional de policía que aun hoy podría ofrecerse como modelo, tal es la claridad de vistas que allí se revela en todo aquello que pueda afectar la seguridad,

la moralidad pública y las buenas costumbres de la población. En el artículo 32 de ese reglamento se autoriza al entonces llamado intendente general á dictar en nombre del gobierno provisional todas las medidas que fueran tendientes á perseguir á los contraventores de faltas que estuvieran comprendidas dentro de estas: faltas al orden público, á la seguridad, á la moralidad y á las buenas costumbres.

Nombrado inmediatamente el señor don José de Moldes intendente de policía, el año 1813, dicta su reglamento policial, y desde el artículo 31 hasta el 37, en ese reglamento no se encuentran sino disposiciones prohibitivas del juego. El artículo 31 dice: «Se prohíbe todo juego de azar y se castigará según las leyes, por la primera vez cincuenta pesos de multa; por la segunda cien y por la tercera, si no tuviese esta cantidad, serán aplicados por ocho años á los ejércitos de la patria; si en la primera y segunda no tuviesen dinero pasarán á la cárcel pública hasta ser aplicados á las armas».

El artículo 32 dice: «Se prohíbe el juego de taba en todos los puntos en donde se reúnan y el que se encuentre jugando será llevado á la cárcel y destinado según convenga.

«Art. 33. Se prohíbe toda tertulia de juego y reunión en las pulperías, y la gente que se encuentre será llevada á la cárcel, de donde será destinada.

«Art. 34. No podrá hacerse alguna carrera de caballos en los días de trabajo sin expreso permiso del intendente de policía.

«Art. 35. Los pulperos, figoneros y mesoneros no permitirán juego en su casa bajo la multa de veinticinco pesos.

«Art. 36. Las canchas se cerrarán al toque de oraciones, y el que quedase dentro pasando una hora, irá á la cárcel con el amo de la casa ó el que la maneje.

«Art. 37. Se prohíbe toda rifa privada sin licencia del intendente general de policía: el que contraviniera perderá la alhaja y veinticinco pesos de multa.

Esta disposición de 1813 con muy insignificantes variantes conserva todo su vigor hasta el año 1816, en que el Director Supremo del Estado, coronel don Juan Martín de Pueyrredón, apercibido, según reza el considerando primero de su bando, «de que no habiéndose obtenido los resultados que fueron el objeto de las providencias reiteradas del gobierno para contener y desarraigar

los juegos perjudiciales que con tanto escándalo se sostienen en la ciudad, con detrimento de la moralidad pública, de la tranquilidad y reposo de las familias y de la seguridad de las fortunas particulares; deseando vivamente ocurrir al exterminio de este pernicioso principio de tantos excesos y vicios por el cual se degradan los ciudadanos hasta perder su honor y manchar el brillo de sus peculiares carreras, confundiendo con las gentes perdidas, he venido en declarar los puntos siguientes sobre cuya observancia será inflexible el gobierno. Artículo 1.º Las leyes y demás disposiciones que hablan sobre los jugadores y los que mantienen casas de juego ó tahurerías, condenándolos á penas deshonorosas y correcciones corporales, están en su vigor y fuerza. Art. 2.º Todo juego de los conocidos bajo la clase de los prohibidos y de envite queda seriamente vedado. Artículo 3.º Las personas que mantengan casas destinadas á estos objetos ó los permitan en las suyas propias serán tratadas conforme á la ley y además castigadas por primera vez con dos meses de arresto y la multa de quinientos pesos, cuyas penas se aumentarán en la proporción de la reincidencia en los mismos abusos... Art. 7.º Todos los individuos que hayan infringido los artículos anteriores se reputarán incurso en las mismas penas.» Al gobernador intendente de policía se le encarga velar sobre el cumplimiento de esta disposición. Y del año 16 adelante, sólo se encuentra en los registros oficiales y en las gacetas que acopian estos documentos, el primer bando de policía que en julio de 1818 dictó el brigadier general don José Rondeau, como gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires, y en él repetidas las prohibiciones sobre los juegos de azar, estableciendo la pena de ocho años de prisión para los jugadores y dueños de las casas que los consintiesen.

Entran en desuso estas prohibiciones por permisos especiales, concedidos en ciertas ocasiones, para verificar rifas en la ciudad de Buenos Aires, consentidas por el gobierno mediante una prebenda que las disposiciones establecen que será del seis por ciento del producido de la rifa. Más adelante, este seis por ciento se eleva al doce, y vuelve á ser reducido al seis; hasta que el 12 de mayo de 1821 el gobernador propietario de la provincia, don Martín Rodríguez, dicta un extenso decreto decla-

rando comprendidos en los juegos de azar, que se hallan prohibidos, los «que se han introducido en esta ciudad bajo el nombre de *ruletas* y de *perfecta unión*.»

Ya podrán apercibirse los señores diputados lo antiguo que es el juego que diezma por ahora la provincia de Buenos Aires, desterrado definitivamente de la capital federal.

No he podido darme cuenta qué juego sería este de *perfecta unión*, por más que haya indagado en los libros de la época y entre las gentes que conservan recuerdos de aquel entonces.

Hay sin embargo un tratadista francés de la materia recordado en una interesante monografía que se debe á un funcionario de la policía de la Capital, que hace mención de un juego llamado *parfaite egalité*, que debo suponer sea el mismo: se trataba de una ruleta simulada, un juego de lotería de cartones.

Dispone este mismo decreto del gobernador Rodríguez que los útiles que sirvieran para ese destestable oficio fueran confiscados y quemados por mano del verdugo, debiendo expresarse en alta voz el nombre del dueño de la casa de donde habían sido substraídos.

El 24 de diciembre de 1821 la honorable junta de representantes daba la célebre ley conocida por los señores diputados suprimiendo los cabildos, creando la justicia de paz y el cargo de jefe de policía. Se nombró en virtud de esa ley, primer jefe de policía de este municipio al señor Joaquín Achával, quien reprodujo en otro reglamento todas las anteriores disposiciones sobre juegos de azar.

El gobernador Las Heras dió en el año 1825 otro decreto sobre juegos de azar, incluyendo los anteriormente prohibidos y una serie de nuevos con diversa nomenclatura.

El 15 de abril del año 1823, el presidente Rivadavia, de quien era ministro don Julián Agüero, resume en un decreto de solo dos artículos todas las disposiciones al respecto dictadas sobre juego, en estos términos:

«Artículo 1.º Quedan restablecidas todas las disposiciones que prohíben los juegos de azar y fijan las penas que deben sufrir los contraventores.

«Artículo 2.º Queda especialmente encargado de la ejecución de este decreto el departamento general de policía.»

Pasa la tiranía y el 12 de agosto del año 52 el dictador provisorio, general

Urquiza, crea la primera municipalidad autónoma en la ciudad de Buenos Aires y repite, sin excepción, todas las prohibiciones que el estado político de la época había hecho caer en desuso tendientes á prohibir los juegos de azar en la provincia de Buenos Aires, encargando á la comisión de educación de la municipalidad todo lo que fuera relativo á juegos, hasta que viene la constitución del año 1854 en la provincia de Buenos Aires. Ella instituye el régimen municipal autónomo. Pone bajo la dependencia de las autoridades municipales la policía de las ciudades y campaña y le confiere las atribuciones reglamentarias de todo aquello que se refiera á seguridad, moralidad pública y buenas costumbres. Sancionada la constitución de 1860, que reproduce en esa parte todos los preceptos consagrados en la de 1854, repite, entre las atribuciones conferidas á las corporaciones municipales autónomas de la provincia de Buenos Aires las mismas á que acabo de referirme; y el 2 de noviembre de 1865 se sanciona la segunda ley orgánica municipal de esta ciudad, y cuando se dictó la célebre ley de municipalidades, bajo el gobierno progresista y sencillo del señor don Carlos Casares, en 1876, también se repitió esta misma serie de disposiciones.

Y en 1879 el entonces jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires señor general Garmendia, usando de todas esas facultades, dictó un nuevo edicto sobre policía, que se pegó en carteles en las esquinas, repitiendo la prohibición

Así se mantenía en vigencia, inalterablemente en vigencia, toda la legislación sobre juegos de azar, hasta el momento en que, en 1880, se federalizó el territorio de la ciudad de Buenos Aires para asiento definitivo de las autoridades de la nación.

Durante el gobierno de Alsina, me parece, el año 1838, se dictó un reglamento general de policía que entró en vigencia el año 80 en la capital, por simple decreto del gobierno de la nación.

Ninguna ley, absolutamente ninguna, después de federalizado el territorio de la ciudad de Buenos Aires, da atribuciones ni á la policía, ni á la municipalidad de la capital, para dictar ordenanzas ó reglamentos prohibitivos de los juegos de azar; pero al discutirse la ley orgánica de los tribunales, se consigna en forma preceptiva el principio previsor que atribuye vigencia dentro del

territorio federalizado á toda la legislación anteriormente existente mientras nuevas leyes del congreso no concurren á derogarlas.

En tal situación, se produce un curioso caso judicial, que es resuelto por mi distinguidísimo amigo el señor diputado por Salta, doctor Andrés Ugarriza, en aquel entonces juez federal.

Es sabido que el doctor Ugarriza ha dejado en su paso por la magistratura honda huella luminosa y enseñanza ilustrativa, lo mismo que dejará en esta cámara el día que quiera, la desgracia para nosotros, que la abandone. (*Muy bien!*)

Sorprendida por la policía de la capital una casa de juego, impone su jefe de aquel entonces una multa á los que contravenían las disposiciones vigentes: ocho días de arresto, me parece. Los detenidos deducen recurso de *habeas corpus* ante el juez federal, y el doctor Ugarriza denega ese recurso, con este solo fundamento: que siendo absolutamente indudable la vigencia del reglamento de policía de 1868 en la capital de la República, era sin duda el jefe de policía la única autoridad competente para aplicar penas por ésta contravención.

Producido ese caso, se ha aplicado en forma varia esta disposición, y hasta el año 1896 en que la municipalidad de la capital de la República arrancando atribuciones de la ley orgánica de 1882 que la creó, y que enumera en su sección cuarta la de conceder permisos para bailes y juegos permitidos,—uso casi términos textuales, si la memoria no me es infiel,—dictó una ordenanza prohibitiva de juegos, suficientemente bien hecha, y que la policía de la capital no habría tenido inconveniente en aplicar, á no mediar esta circunstancia, que habría hecho irrisoria su intervención: determina la misma ley orgánica de 1882 que las multas á las infracciones municipales han de hacerse efectivas por vía de apremio judicial.

Imaginense los señores diputados á la policía que sorprende una casa de juego, limitando toda su acción á tomar los nombres de los presentes y pasarlos por nota á la municipalidad á fin de que ésta, á su vez, los pase al fiscal y éste deduzca acción ante los tribunales ordinarios, por cobro de multa. ¡No habría policía más ridícula en el universo!

El jefe de policía entonces, desconoció la legalidad de aquella ordenanza,

alegando que no estaba autorizado el concejo deliberante para dictarla, por cuanto la ley de creación de 1882 sólo le atribuía facultad para conceder permisos para bailes y juegos permitidos, y es notorio que los juegos de azar no entran en esa categoría, y promulgó el edicto que rige en pleno vigor hasta el momento actual, declarando ser contravención de policía el juego de azar y aplicando penas á los contraventores.

Este edicto se ha cumplido hasta ahora con bastante eficacia; pero el hecho de que en el momento presente se discuta ante los tribunales una, dos ó más acusaciones contra funcionarios superiores de policía que hayan procedido en virtud de la interpretación superior, está revelando, á las claras, la necesidad de establecer en una ley lo que en todas partes existe en los códigos, y que acabo de enumerar extensamente.

Me parece que estos son elementos suficientes de juicio para fundar la primera parte del proyecto que someto á la consideración de la cámara, y la ruego que me disculpe si he sido un poco extenso en la fatigosa relación de los antecedentes que ha escuchado.

Llego, señor presidente, al segundo capítulo, diré así, de mi proyecto.

El modifica substancialmente la ley número 3313 de noviembre de 1895 que creó la lotería de beneficencia nacional y que pena con multa y arresto la venta y circulación de toda otra lotería en la capital de la República.

No está lejano el día en que se sabrá, señor presidente, y posiblemente sea yo mismo quien venga á denunciarlo al país desde esta banca, que están á punto de cerrarse en la capital de la República casi todos los asilos que cuidan del desvalido, que amparan la infancia abandonada ó que asisten á la miseria vergonzante. Las distinguidísimas maironas que cuidan esta obra cristiana, temen ya el vergonzoso resultado, y, es doloroso decirlo, los poderes públicos lo ven venir con culpable indiferencia.

A esa situación habremos llegado por diversas causas.

Desde luego, la profunda despreocupación,—¿por qué, también, no decirlo?—con que los potentados de la fortuna asisten en este país al problema de la miseria. ¡No hay una sola obra pía debida á la munificencia privada! ¡Ni la sala de un hospital, ni la casa de maternidad, ni la cuna de un expósito han

visto transponer jamás sus umbrales á la riqueza argentina. (*Muy bien!*)

Menos mal, señor presidente, si alguna universidad nos diera el nombre de su fundador generoso; menos mal, todavía, si alguna escuela, un instituto, la más modesta sección de una biblioteca pública, nos atestiguara alguno de esos donativos tan frecuentes en otros países. Pero, nó, señor presidente!

Sr. Loureiro—¿Me permite el señor diputado?

Sr. Varela Ortiz—Con el mayor placer.

Sr. Loureiro—Deseo hacer una rectificación á esta última alusión.

Sr. Varela Ortiz—Me será muy agradable la rectificación del señor diputado.

Sr. Loureiro—¿Me permite el señor presidente?

Sr. Presidente—Sí, señor.

Sr. Loureiro—El año 1882 un ciudadano argentino donó para la fundación de la escuela superior de Belgrano un millón de pesos moneda corriente; donó también diez mil pesos de la misma moneda para la fundación de una escuela en Villa Massini, contribuyendo además á sufragar los gastos necesarios para la escrituración del terreno que donó la señora de Sebastiani con ese objeto; y dió otras sumas para fomento de las bibliotecas de Bahía Blanca y de Villa Mercedes en la provincia de Buenos Aires.

Sr. Varela Ortiz—Efectivamente...

Sr. Loureiro—Voy á concluir, señor presidente. Ese ciudadano más tarde perdió la mayor parte de los bienes que le habían quedado para su subsistencia, por los desastres de los bancos de la provincia de Buenos Aires. Hoy está en los últimos años de su existencia y apenas tiene con que llenar sus necesidades materiales, después de haber colmado las necesidades de los demás con el fruto de su trabajo. Me refiero al señor Casto Munita.

Sr. Gouchon—Agregaré al nombre citado, el del señor León Gallardo, que dió una suma considerable para el asilo San José, en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Sr. Varela Ortiz—Le será muy agradable al país conocer los nombres de esos raros benefactores de la humanidad doliente ó de la juventud que estudia.

Sr. Loureiro—Podría agregar todavía el nombre del señor Wenceslao

Posse, de Tucumán, que dió doscientos mil pesos moneda corriente para las escuelas.

Sr. Padilla — Sí; también podrían citarse otros nombres...

Sr. Varela Ortiz — Bien, señor presidente; yo no creo haber sido exagerado, ni poco ni mucho, al hacer la afirmación anterior. En la historia de la República es tan corta la lista, que los señores diputados apenas si han podido rememorar tres nombres, y eso desparrramados en su vasto territorio.

Varios señores diputados — Y muchos otros.

Sr. Varela Ortiz — Pero ¡cuántos quieren que sean, señores diputados! Me bastaría contestarles: en la totalidad de los hospitales, de los asilos, de las escuelas de la capital, ¿dónde está á su frente el nombre de un fundador generoso?

Sr. Bollini — Porque no lo ponen.

Sr. Drago — ¿Y la escuela Petronila Rodríguez?

Sr. Varela Ortiz — La única, tal vez, señor diputado.

Sr. Lacasa — Las citas que se hacen abonan la tesis del señor diputado Varela Ortiz.

Sr. Varela Ortiz — Estas pequeñas, rarísimas excepciones que se citan, confirman la regla.

Tengo interés en repetir, ya otra vez lo he hecho en el seno de esta cámara, que no es exacto que los potentados de la fortuna, en la República Argentina, concurran á la asistencia del desvalido en ninguna forma, ni á hacer profusivas, como debieran, en esta capital, las escuelas que ella requiere. *(Muy bien! Aplausos)*.

En poco más, este centro va á ser la cabeza deforme de la República; aquí va á estar representada la cuarta parte de la población total del país y, sin embargo, todo se le pide al estado, y el día que las rentas del estado flaqueen no habrá escuelas y se cerrarán asilos! *(Muy bien! Aplausos)*.

Y paso adelante, señor presidente... Otra de las causas en que radica esta situación, que cuando se produzca será de vergüenza, es la ligereza — ¿por qué no decirlo? — con que nosotros, los legisladores, olvidamos á menudo el espíritu en que se inspiró la ley de asistencia pública, á que antes me he referido, la ley de la lotería nacional. Sus recursos ya no se distribuyen, como la ley lo quiso; y como la ley lo quiso para que tuviera justificativo y pudiera ser tolera-

da la ley que monopoliza el juego de lotería: exclusivamente para los hospitales y asilos públicos. Cuando las rentas del estado se sienten agotadas y un gasto extraordinario se presenta al seno del congreso, á nombre de una necesidad efectiva, á nombre también de una regalía rumbosa, convertimos, en el acto, al estado, en comanditario de los asilos y les quita...os, sin piedad, los únicos fondos de que disponen para su sostenimiento, con el propósito exclusivo de aliviar al fisco.

La tercera causa en que podría radicarse esta situación, que de producirse sería una vergüenza, es la competencia bochornosa que, al amparo de la misma ley dictada para combatirla y á la sombra de una desidia judicial que ya asume caracteres crónicos en nuestro país, le hacen las loterías clandestinas, á veces simples papeles de *escroquerie* vulgar, quitándole, señor presidente, sinó la mitad, por lo menos la tercera parte de lo que anualmente debiera producir.

Siete años... ¿para qué voy á recordar y agregar entre las causas determinantes del poco resultado de este monopolio del juego de la lotería en la capital de la República, consagrado por la ley del 95 en favor de la asistencia pública en general? ¿para qué voy á recordar digo la deplorable administración de la lotería nacional, que vive con presupuestos dispendiosos, rumbosísimos, haciendo programas de loterías que se dirían confabulaciones para permitir el fácil desenvolvimiento de las loterías clandestinas?

En fin; podría seguir enumerando causas, pero prefiero incitar á la honorable cámara para que dé pronto curso á este proyecto, porque tengo la persuasión firme, como la tuve tres años atrás, cuando me cupo el honor de presentar el proyecto especial sobre esta materia, de que su sanción hará desalojar definitivamente de la capital de la República todas las loterías clandestinas.

Y tanto por haber fatigado ya á la honorable cámara como por estar fatigado yo mismo, pasaré rápidamente á la última parte de mi proyecto, que prohíbe la explotación de esta industria original llamada «de apuestas» cualquiera que sea el traje con que las visitan la ingeniosa inventiva de los profesionales del delito, que son los que á ella se dedican.

Buenos Aires está invadido, señor presidente, por academias de billar, por velódromos de ocasión, por frontones

de pelota, donde se aglomera una concurrencia enorme, á donde concurre el ahorro de los pobres para apostar á la velocidad de un caballo, á la destreza de un velocipedista, á la habilidad de un maestro de billar, sin conocer casi nunca ni el nombre del caballo que corre, ni el tipo del campeón de la bicicleta, ni la existencia, siquiera, del carambolero. (*Risas*).

El estado, apercibido del mal social que comportaba esta difusión de casas, llamadas vulgarmente de quinielas y de sport, verdaderas tahurerías abiertas con el solo propósito de hacer un llamado á la pasión del juego y con el solo pensamiento del lucro personal, llegó á pensar un momento que podía combatirlos por medio de un impuesto alto. El recurso fué contraproducente. Buenos Aires continuó siempre y hoy mismo continúa con su gran pizarra de quinielas y de sport, y la autoridad se ha declarado impotente para destruir el vicio en esta forma desarrollado.

El fondo de esta parte de mi proyecto me ha sido inspirado, señor presidente, por una ley del parlamento francés, del año 1891, que se refiere exclusivamente á la prohibición de la explotación de apuestas sobre carreras. Tiene, desde luego, la enorme ventaja de haber producido ya una extensa y muy luminosa jurisprudencia judicial que nuestros tribunales podrán aprovechar.

Yo la he extendido á todas las apuestas en general, y me parece que es este un pensamiento que encuadra en el anhelo general de la opinión pública. Aquí podría dar por terminada esta larga exposición, hecha para fundar el proyecto, si no me sintiera obligado á recoger algunas observaciones hechas por diversos órganos de publicidad en la capital de la República, apresurándome, desde luego, á agradecerles la benevolencia con que han considerado mi iniciativa, y la han discutido, cosa que no con mucha frecuencia suele ocurrir.

Se ha dicho, señor presidente, que la iniciativa era muy buena, pero que no era completa; que prohibiéndose los juegos de azar, debía prohibirse también la lotería nacional; que prohibiéndose las apuestas mútuas, las casas de agencias de sport, debía prohibirse también el juego en el recinto de los hipódromos.

Yo no he traído á la cámara señor presidente, una idea moralista; he querido simplemente traer un pensamiento de legislador, práctico y posible.

Sé perfectamente que el ideal sería

que todos los hospitales en la capital de la República existieran en la medida que fueran necesarios, con arreglo á los adelantos científicos que el progreso de la ciencia aconseja en el día; que fuera lo mayor posible la difusión de los asilos; pero sé también, señor presidente, que para sostener los pocos que actualmente mantenemos, nos es indispensable pedir, en la forma que la ley del 95 ya lo pidió, al vicio, los elementos necesarios para sostenerlos. No habría dentro de las rentas generales de la nación, en el momento actual, ni será posible que haya, dadas las angustias por que el tesoro pasa, de donde sacar los cinco millones de pesos que la lotería de beneficencia nacional produce anualmente y que se reparten, como todos los señores diputados lo saben, el 60 % en la capital para atender los hospitales y asilos, y el 40 % restante en el resto de la República; y todos los señores diputados que vienen de las provincias conocen perfectamente los enormes beneficios que se recogen de ese 40 %.

De manera, señor presidente, que sin declararme partidario de la lotería nacional, vuelvo á decir que me he puesto en el caso de traer á la cámara nada más que un pensamiento práctico y posible.

Otra observación hecha por un diario de la capital, *El Tiempo*, me parece, se refiere á que los juegos de azar son materia codificada y que, siendo de vigencia nacional el código penal, no debía limitarse la vigencia de esta ley á la capital y territorios federales.

Hay un inconveniente serio para hacerlo así.

El primer artículo de la ley, aquel que se refiere al establecimiento de casas de juego, que es considerado como delito por mi proyecto podrá ser incorporado al código penal. Así se establece en Francia, Bélgica, Italia y otras naciones, como también lo que va comprendido en la segunda parte de ese proyecto, es decir, lo que se refiere á los juegos de azar en parajes abiertos al público, calles, caminos, plazas y en cualquier punto de acceso libre.

Pero si esta segunda parte se halla incorporada al código de estas otras naciones, es porque allí el régimen de gobierno es unitario y todo lo que es contravención, en Francia, por ejemplo en la ciudad de París, lo es en la de Lyon, en la de Marsella, en la de Burdeos y en todas partes del territorio; mientras

aquí no está todavía definido el punto constitucional ni demostrado que la constitución diera al congreso la facultad de dictar leyes de contravención con vigencia en todo el territorio de la República; y de ahí es que he creído necesario limitar los efectos de este proyecto á la capital de la República y territorios nacionales.

La lotería de beneficencia nacional tampoco podría ser incluida en el código penal, porque es de carácter reglamentario, casi de detalle de reglamentación y porque vendría á dejar sin vida á algunas loterías de provincia autorizadas por ley de sus respectivas legislaturas.

En cuanto á lo que se refiere á las apuestas, me parece que la modalidad de este delito sólo es conocida en la capital.

Bien, señor presidente: aquí termino y pido disculpa á mis honorables colegas por la molestia larga que les he proporcionado y les ruego quieran darme su apoyo para que este proyecto siga el trámite reglamentario.

He dicho. (*¡Muy bien! muy bien! Aplausos en la barra.*)

—Apoyado.

Sr. Presidente—A la comisión de legislación.

Sr. Martínez (J.)—Pido la palabra.

Voy á hacer una declaración, ó mejor dicho, voy á pedir al señor diputado que acaba de hablar, que explique sus palabras que, para mí, importan un cargo injusto, ó más bien dicho avanzado contra la comisión administradora de la lotería.

La comisión de la lotería, señor presidente, ha estado y está compuesta de caballeros distinguidos, y para demostrarlo no tendría más que citar los nombres de Unzué, Martínez de Hoz y tantos otros; aquí mismo hay dos directores de la lotería; y, yo, francamente, sólo me explico por el calor con que habla el señor diputado, que haya podido envolver á la comisión en tales cargos. Los miembros de la comisión de la lotería son hombres que están allí prestando sus servicios *ad honorem* y cuyo sólo nombre es una garantía, no sólo para el congreso sino para el país entero.

Invito al señor diputado que explique esto á la cámara y no deje en la duda estos cargos.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra. Naturalmente, que yo no necesitaba

que el señor diputado me recordara que entre las personas... no que entre las personas... que la totalidad de los señores vocales de la comisión administradora de la lotería nacional de beneficencia son caballeros respetables, de honorabilidad acrisolada, con una posición social envidiable; muchos de ellos, la mayor parte, muy amigos míos, y tengo el gusto de serlo muy íntimo del señor diputado por la capital, vocal de la comisión administradora de la lotería.

Cuando yo discuto en esta cámara, señor presidente, un asunto de orden público, que afecta en cualquiera de sus ramificaciones el interés social, jamás agravo ni me preocupan las personas; discuto hechos, siento premisas, hago demostraciones ó formulo denuncias.

He dicho, si mal no recuerdo, en las palabras que antes pronuncié, que el presupuesto de la administración de la lotería, era dispendioso y rumboso; que era deplorable esa administración, bajo ese punto. Lo repito, lo vuelvo á repetir y lo repetiré siempre! Lo vengo diciendo desde hace tres años en esta cámara y ahí está durmiendo todavía en la cartera de la comisión, un proyecto que lleva mi firma, pidiendo que venga aquí al seno de la cámara el presupuesto de la lotería nacional para ser discutido y votado.

Esos son los inconvenientes de las leyes que autorizan á las administraciones semiautónomas á darse presupuestos sin control, y el señor diputado —yo no sé si la comisión entera se preocupa de estas cosas, yo no conozco el mecanismo interno de ella—no me negará digo, que aquel es un presupuesto rumboso y dispendioso. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Martínez (J.)—Voy á explicar al señor diputado.

Sr. Presidente—Hago presente á los señores diputados que no hay nada en discusión.

Sr. Varela Ortiz—Yo rogaría al señor presidente que, tratándose de un asunto que el señor diputado entiende que afecta su delicadeza personal, no se opusiera á que el diálogo continúe.

No quiero dejar á los señores diputados bajo la impresión que he querido hacer un cargo á mi colega ni á ninguno de los distinguidísimos caballeros que forman aquella comisión administradora.

Sr. Martínez (J.)—Perfectamente; ya sé que es así.

Sr. Varela (H.)—Ha hablado de los programas.

Sr. Varela Ortiz—He dicho también, y ahora me lo recuerda el señor diputado, que los programas de la lotería de la beneficencia nacional diríanse hechos para proteger las loterías clandestinas.

¿Dónde está la gravedad de esta opinión? Pero, señor presidente, si un mal programa de la lotería nacional es una protección indirecta de las loterías clandestinas! ¡Si cuando la lotería nacional se preocupa de hacer loterías periódicas por sumas altas de cuatrocientos mil, de medio millón, de un millón de pesos, cuyos billetes no se compran totalmente, que le quedan en sus cajas por un valor de treinta, cuarenta mil pesos se convierte su administración en jugadora á la par del público! Esos son los programas mal hechos que permiten á las loterías clandestinas deslizarse fácilmente con sus pequeños premios de veinte mil pesos! ¿Dónde está el cargo entonces? Es una opinión, y todos tenemos derecho, en esta cámara y fuera de ella, de estudiar los programas de la lotería nacional. ¿Dónde está el cargo á estos caballeros que forman la comisión de la lotería? Acaso no hay derecho de estudiar estas cosas? Me parece que sí.

He dejado á salvo la susceptibilidad del señor diputado, y me quedo con mi opinión anterior respecto á los programas y presupuesto de la lotería nacional.

He dicho. (*Aplausos*).

Sr. Gouchon—Pido la palabra al solo efecto de salvar de la condenación general fulminada contra los favorecidos de la fortuna, el nombre de algunas personas.

Sr. Varela Ortiz—Yo no puedo estar consintiendo, por más buena voluntad que tenga, en que se me esté rectificando opiniones personales que no están en debate.

Sr. Presidente—No hay nada en discusión.

Sr. Gouchon—Quería dejar simplemente constancia de que los ricos de Buenos Aires....

Sr. Varela Ortiz—No podemos engolfarnos en una discusión de esta naturaleza, porque yo le voy á rectificar á mi vez.

Sr. Presidente—No hay nada en discusión.

Sr. Martínez (J.)—Después de la declaración del señor diputado, tan categórica, no tengo nada que observar.

Sr. Gouchon—Pido la palabra.

Sr. Varela Ortiz—Quiere decir que nos engolfaremos en una discusión sobre los ricos de Buenos Aires, y si me citan los que dieron yo mencionaré los que nunca han dado.

Sr. Presidente—No hay nada en discusión.

Sr. Gouchon—La pido para fundar un proyecto.

Por subscripción privada se ha fundado uno de los principales hospitales de la América del Sur, el hospital italiano, en esta capital; por subscripción privada se han fundado además, el hospital español, el hospital francés, el asilo y refugio para marineros. La viuda de Dorrego fundó la escuela establecida en la calle Talcahuano; la señora Dorrego de Ortiz Basualdo ha fundado numerosas escuelas profesionales para niños; la señora Francisca Cabral, el primer hospital de la ciudad de Corrientes y varias escuelas; la señora Margarita Money de Morgan ha fundado un hospital en San Antonio de Areco.

Estos son benefactores de la humanidad que recuerdo en este momento y cuyos nombres quiero que se consiguen en el acta de esta sesión.

Sr. Presidente—¿Y el proyecto que iba á fundar?

Sr. Gouchon—El proyecto lo presentaré después. (*Risas*).

La cámara de diputados

RESUELVE:

Que, por intermedio del señor ministro de hacienda, se sirva el poder ejecutivo informar de lo siguiente:

1.º Sobre el monto gastado del fondo de conversión, el comprometido por contratos y la suma disponible actualmente.

2.º Si es exacto que se han emitido títulos creados por las leyes 3039, 3282, 3420, 3718 y 4028 para otros objetos ó contratos que los especialmente determinados por dichas leyes.

M. Carlés.

Mayo 16 de 1902.

Sr. Carlés—Pido la palabra.

Me felicito, señor presidente, que un ambiente tan simpático de moralidad ayude á informar este proyecto que de por sí está informado.

Soy de los que se preocupan en seguir de cerca el movimiento administrativo, y por consiguiente, y á pesar de ser contrario al espíritu que anima al gobierno, manifiesto mis temores sobre la marcha de las finanzas nacionales.

Objeto de dudas y de vacilaciones, los hombres que dirigen las finanzas